

El vínculo entre la entidad y el personal mencionado, a excepción de los monitores en prácticas, se establecerá mediante relación laboral, a través de la modalidad contractual que corresponda.

d) Suscribir por la entidad beneficiaria un seguro de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades que por culpa o negligencia puedan derivarse de la actividad subvencionada.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE**  
**DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,**  
**SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE**  
**AMBIENTE URBANO**

**692.-** Ante la imposibilidad de notificación a D.<sup>a</sup> JOSEFA JEREZ GONZÁLEZ, con DNI nº 22.917.709, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el siguiente anuncio:

Procsan F.4-06

"El Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente, por Resolución nº 916, de fecha 15/12/06/, registrada con fecha 15/12/06/, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, ha tenido conocimiento que, por D.<sup>a</sup> JOSEFA JEREZ GONZÁLEZ, con DNI nº 22.917.709, con domicilio en esta Ciudad, C/. Bilbao nº 27- 3º Dcha., con fecha 05-10-06, ha llevado a cabo el siguiente hecho:

-Abandono del vehículo de su propiedad (completamente desguazado), matrícula CO-0999- Y, marca Renault, modelo Express GTD, en la Vaguada Villa Pilar.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de infracción administrativa, calificada como leve, de conformidad con la tipificación establecida en el art. 34.4.c), de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, puede corresponder sanción pecuniaria de hasta 601 €.

Esta Dirección General es el órgano competente para acordar la iniciación y resolver el procedimiento

sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de su estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformidad con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he tenido a bien dictar la siguiente.

**RESOLUCIÓN**

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm. F.04-06, a D.<sup>a</sup> JOSEFA JEREZ GONZÁLEZ, con domicilio en esta Ciudad, en C/. Bilbao nº 27- 3º Dcha., para determinar las infracciones en que hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las sanciones que en Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar Instructora de este expediente a D.<sup>a</sup> Francisca Fernández Santos, Jefe de Negociado de Procedimientos Administrativos, de esta Consejería. De conformidad con lo establecido en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá promoverse su recusación por los interesados, en cualquier momento del procedimiento, si concurren las causas expresamente enumeradas en el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de incoación al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su responsabilidad en los términos establecidos en este documento, se podrá resolver el expediente con la imposición de la sanción que proceda (multa de 60 €), sin perjuicio de la posible interposición de los recursos que contra dicha resolución correspondan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de la sanción establecida, en cualquier momento anterior a la resolución del expediente, podrá implicar la resolución del procedimiento, sin perjuicio de la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente, por tanto, en cualquier momento, el interesado tiene derecho a conocer el curso de la tramitación y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo.